



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia:	Verbal
Demandante:	ALBA DOLORES LÓPEZ CARDENAS
Demandado:	ANDRES AVELINO RUEDA OSORIO
Decisión:	Revoca auto.
Radicado:	05001 31 03 004 2020 00201 01
Auto nro:	057

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN.

Medellín, catorce de diciembre de dos mil veintiuno

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión tomada dentro de la audiencia realizada el 26 de noviembre de 2021, por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, mediante la cual NEGÓ LA PRUEBA POR INFORME, dentro del proceso verbal instaurado por ALBA DOLORES LÓPEZ CARDENAS y VERONICA ARBELAEZ LÓPEZ, en contra de ANDRÉS AVELINO RUEDA OSORIO, SISTEMA ALIMENTADOR S.A.S., SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

ANTECEDENTES:

En el proceso verbal de la referencia, en audiencia del 16 de noviembre último se decretaron las pruebas pedidas por las partes, negándose la prueba por informe a la Fiscalía de la totalidad del expediente penal, como lo dispone el artículo 168 del C. General del P., por inconducente. Inconforme con dicha decisión, el apoderado

de la demandada interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, negándose el primero y concediendo la alzada.

Sustenta el inconforme su solicitud arguyendo que, si bien dentro del proceso civil se han aportado por los diferentes apartes de ese proceso, en esa documentación no se encuentra la totalidad de pruebas que pudieron haber practicado por la Fiscalía General de la Nación a lo largo de su investigación; refirió que en este momento ese ente no ha imputado ni realizado ningún tipo de avance y tratándose de un proceso penal adversarial se tiene que como parte procesada, el señor Avelino Rueda no conoce ninguno de los apartes de la investigación y en el evento sería importante conocerlos; considerando que sería relevante revisarse otros elementos que podrían darse, no solo el que se decretó, sino las actividades realizadas por el investigador de campo, en especial las posibles conclusiones a las que haya llegado de como ocurrió ese accidente

Una vez corrido el traslado establecido en el artículo 326 ejusdem, la parte demandante no se pronunció. Una vez recibido el expediente en esta Corporación, resulta preciso anotar que en sede de segunda instancia, lo procedente es dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso, el cual respecto al trámite de la apelación de autos dispone que: *"Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisibile, así lo decidirá en auto; **en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso**"*, razón por la cual al no advertirse la existencia de alguna causal de inadmisión del recurso, se procederá de plano a su resolución.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. El artículo 11 del C. General del P. reza: *"Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias"*; bajo esta premisa se procederá a resolver.

Ha sostenido la doctrina que: *"[en] los distintos ordenamientos, que se refieren a la prueba judicial está la idea de que en el proceso se pretende establecer si determinados hechos han incurrido o no y que las pruebas sirven para resolver el problema..."*¹.

De ahí que la prueba sea de vital importancia para demostrar los hechos objeto de la litis, toda vez que al fallador le está prohibido basarse en su propia experiencia para dictar sentencia, pues su decisión debe fundamentarse en las pruebas que han sido legalmente recaudadas y allegadas oportunamente al proceso, principio este contenido en el artículo 164 del C. General del P.

A su turno, el artículo 168 ejusdem establece que para que la prueba sea procedente, debe revestir unas características, a saber: i) conducencia, ii) pertinencia y iii) utilidad. Sobre la primera de ellas, se sabe que está dada por la idoneidad legal que posee el

¹ TARUFFO MICHELE, *"LA PRUEBA DE LOS HECHOS"* Ed. Trotta, 4ª Edición, 2011, Pág. 21

medio probatorio para acreditar determinado hecho; la segunda, impone que el medio de convicción se relacione con el tema de prueba, esto es, que sirva al propósito de aclarar el objeto de discusión que suscita la controversia, y la última hace alusión a la necesidad de la prueba; es decir, que la misma sea provechosa o valiosa para el proceso, de manera que toda probanza inocua, por bienhechora que sea, ha de rechazarse.

Luego, el artículo 173 ibídem establece que “...*Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente...*”. A su turno el artículo 275 reza: “*A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo. Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso, o por iniciarse*”. (Subrayas propias).

De manera que el Juez se abstendrá de decretar pruebas tendientes a la obtención de documentos que las partes pudieron, previo al inicio de la demanda o la actuación procesal correspondiente, conseguir directamente o mediante derecho de petición y el que en todo caso se regirá por la norma de la Ley 1755 de 2015, debiendo

en cada caso verificar si lo solicitado se encuentra acorde con lo estipulado en el artículo 43 ejusdem, la cual en su numeral 4 establece que dentro de los poderes de ordenación e instrucción del Juez se encuentra el de: *"Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado."*

Respecto de los documentos reservados el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 clasificó de manera puntual los que tenían dicha condición, estableciéndose en los artículos siguientes la forma de levantar la reserva y la correspondiente consecución de la información.

2. En este asunto, se puede advertir que el señor Andrés Avelino Rueda Osorio al momento de contestar la demanda solicitó se ordenará oficiar a la FISCALÍA CIENTO SEIS SECCIONAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN para que remitiera copia auténtica de todo lo actuado dentro del expediente número 050016000206201922664, aportándose dentro de los anexos la constancia del envío de la solicitud a dicha entidad, sin aportar su respuesta.

En punto al tema, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 enuncia como reservados los siguientes documentos:

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria [1266](#) de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.

Respecto de la reserva en los procesos penales el artículo 22 de la Ley 1908 de 2018 que modificó el artículo 307A de la Ley 906 de 2004 dispone que: *“Reserva de la actuación penal. La indagación será reservada. En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general”*.

Bajo esta línea argumentativa, resulta claro que la parte que solicita la obtención de un proceso penal acudió a dicha institución

a pedir las piezas procesales hoy echadas de menos en este proceso y las cuales, a su juicio, se requieren para esclarecer el hecho que diera lugar a la pretensión indemnizatoria, solicitud que a todas luces resulta procedente, pertinente, legal y necesaria probatoriamente para la relación sustancial que se discute. Resulta relevante además en este proceso conocer el estado del mismos, pues de allí se podría derivar o no la responsabilidad que hoy se le endilga al resistente.

Deviene de lo dicho, que respecto de esta solicitud la misma era procedente, debiéndose oficiar a esta entidad para que aportara la totalidad del proceso penal ya referenciado, pues es importante para el debate que se suscitó en este asunto.

Corolario de lo expuesto, la decisión del Juez de primer grado será REVOCADA y acorde con lo expuesto en esta providencia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN.**

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR oficiar a FISCALÍA CIENTO SEIS SECCIONAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN para que remitiera copia auténtica de todo lo actuado



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

dentro del expediente número 050016000206201922664. El Juez de instancia libraré las comunicaciones respectivas.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia

CUARTO: Para los efectos del inciso final del artículo 323 del C. G del P. se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE

(Firma scaneada conforme al Art. 11 del Decreto 491 del 28 de Marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado